

# La agricultura en México de 1950 a 1975: el fracaso de una falsa analogía

GUSTAVO ESTEVA

De la historia agrícola mexicana en el último cuarto de siglo parece desprenderse una severa lección. No es seguro, sin embargo, que el país la haya asimilado, tanto por las múltiples interpretaciones que de ella se han hecho como porque ha afectado de muy diversas maneras a distintos sectores de la población: hay quienes la padecieron como hay quienes la disfrutaron. Al tratar aquí de precisar el sentido de esa lección, se pretende indagar la posibilidad de lograr que de las diversas maneras de vivirla y de pensarla pueda surgir una sola estrategia para aprovecharla. Es la segunda vez en este siglo que la historia nos la dicta. Acaso no haya una tercera oportunidad.

No bien se celebró en 1917 el pacto social en que cristalizó la Revolución mexicana, se iniciaron intentos de promover que nuestra actividad agrícola se desarrollara por la vía capitalista, por ser éste el régimen predominante en la sociedad. Se empleó para ello, por analogía, un modelo que en otras partes había tenido éxito. Sin embargo, como la estructura social que surgió de la Revolución y el sistema de relaciones económicas con el exterior dentro del cual se planteó nuestro desarrollo diferían sustancialmente de las

condiciones preexistentes en los países donde se logró la aplicación exitosa del modelo, el esfuerzo de aplicarlo al nuestro resultó infructuoso. A principios de la década de 1930 la situación de la producción agrícola nacional exigió poner en práctica una nueva orientación de nuestro desarrollo, conforme a otros derroteros, lo cual se hizo desde 1934. Aquella experiencia histórica no fue tomada en debida cuenta. Sobre todo a partir de 1945 se emprendió un nuevo ensayo de lograr el desarrollo capitalista en la agricultura. Veinticinco años después, en 1970, era ya claro que el intento había fracasado de nuevo. Es ocioso especular sobre la *necesidad social* de esta política fallida, frente a otras posibilidades que parecían abiertas, como es estéril recordar aquí sus méritos innegables en términos del crecimiento de ciertos sectores de la actividad económica. Pero las distorsiones y debilidades del resultado final son tan evidentes que no parecería caber duda alguna sobre la irracionalidad del modelo impuesto al país y su falta de viabilidad. Requiere explicación, por ello, el hecho de que tenga aún ahora decididos partidarios y es preciso, al mismo tiempo, redefinir nuevas opciones de desarrollo para el momento actual. Al hacerlo, hemos de acercarnos un poco más a la historia, dejar

de lado la abstracción de los rasgos generales del proceso y tomar contacto con sus protagonistas, aun a riesgo de repetir argumentos ya bien sabidos por muchos, que otros, no obstante, prefieren ignorar.

#### EL MODELO DE DESARROLLO ESTERILIZADOR: 1950-1970

##### *El escenario y sus actores*

Hacia 1950, los principales protagonistas de esta historia se encontraban ya claramente definidos. En los siguientes 20 años habría de modificarse su integración cuantitativa y su fuerza relativa, pero no entrarían nuevos actores en el escenario. En auténticas pequeñas propiedades, en colonias —recién establecidas— y en latifundios abiertos o simulados, apoyándose en buena medida en las grandes obras de infraestructura acabadas de construir, un vigoroso grupo de empresarios de la tierra marchaba ya a pasos firmes: 10.5% de los productores, propietarios privados de más de 5 ha., aportaban el 54% del valor de la producción en 1950. Subsistía junto a ellos cierto número de ejidos colectivos que habían resistido hasta entonces todos los embates, pero que se enfrentaban cada vez a más dificultades para sobrevivir. Esparecidos por todo el país, mientras tanto, se multiplicaban los ejidos de explotación parcelaria y las pequeñas propiedades minifundistas: los propietarios privados de menos de 5 ha. representaban el 35.1% de los productores y aportaban sólo 8.7% del valor de la producción; las cifras respectivas en cuanto a los ejidatarios eran de 54.4 y 37.3 por ciento. Habían aparecido ya también jornaleros temporales o permanentes (400 000, según el Censo) y operaban asimismo obreros agrícolas (1 793 000, según una estimación) en explotaciones agropecuarias bien establecidas o en agroindustrias como el beneficio del café o la transformación de la caña de azúcar, actividades desarrolladas en un lapso de siglos. Finalmente, marginadas y explotadas, como auténticos parias del campo, sobrevivían apenas numerosas comunidades indígenas, en las que la conservación de la estructura social tradicional era una defensa muy débil ante la penetración comercial del sector moderno de la economía.

Actores tan heterogéneos y desiguales se presentaban en un escenario altamente dinámico. La inyección de recursos de la segunda mitad de la década de 1940 (20% de la inversión pública total de 1946 a 1950) no había sido en vano. La agricultura estaba creciendo a una tasa más alta que la de la población, se avanzaba —aunque fuese lentamente— hacia el logro de la autosuficiencia en la producción de alimentos básicos y se generaba ya un saldo favorable de la balanza comercial agropecuaria, no obstante haberse elevado el consumo *per capita* de productos del campo. Tan espléndido avance tenía, sin embargo, un lado oscuro: una porción significativa de los participantes en el proceso empleó la corrupción como una argamasa indispensable para construir todo este aparato productivo. Y el agente al que apeló la mayor parte de las veces para producir o colocar tal argamasa fue un actor cuyos obvios perfiles de villano en nada reducen su capacidad como hilo conductor de la obra: el cacique. Se trata, sin duda, del peor “empresario” agrícola imaginable: no organiza la producción ni contribuye a su desarrollo. Como estructura económica intermediaria entre la

comunidad rural y el resto de la sociedad, su papel consiste más bien en extraer recursos de la agricultura, pero de la misma manera que es incapaz de impulsar el desarrollo de las fuerzas productivas en el campo, resulta un pésimo empresario urbano y en sus inversiones en tierras no hace sino reproducir el esquema predatorio que aplica en su fuente original de poder.

A pesar de todo esto, el cacique es un agente clave para el funcionamiento de la porción de la actividad agrícola que no opera en los términos de la explotación capitalista de la tierra. Destruída la unidad productiva que integraba la hacienda y ante la incapacidad del ejido de asumir colectivamente su explotación en el plazo que hubiese sido necesario, los campesinos quedaron librados a una forma miserable de explotación individual o familiar de sus parcelas ejidales o privadas. El cacique, que en su origen fue en muchos casos un auténtico líder agrario que encabezó a sus compañeros en la lucha por la tierra, se convirtió en un vehículo aglutinante del esfuerzo productivo, que no podía organizarlo pero sí someterlo. Su base inicial de explotación adoptó múltiples características: la utilización exitosa de su propia tierra, la operación de centros de compra o de venta, la disponibilidad de efectivo, sus relaciones en el exterior y muchas otras. Con el tiempo, su acción se extendió como un cáncer hasta abarcar todas las áreas de la vida de la comunidad: lo mismo fue capaz de atacar sobre ella recursos públicos que la represión policiaca, igual financiaba y compraba los cosechas, que vendía los productos de consumo, cubría los gastos de una boda o un funeral y organizaba una festividad religiosa. Contrapartida del empresario que se desarrollaba o creció acelerado en la agricultura capitalista, predominantemente de riego, no podía como el revolucionar las fuerzas productivas, pues su operación se basaba en la ilegalidad, en la violencia y en una representación política espuria, de tal modo que toda inversión permanente en la tierra conllevaba un riesgo inaceptable. Sus “inversiones” en la agricultura misma tenían que ser de corto, cortísimo plazo, apenas quizá el lapso de un ciclo agrícola. Impedía que el excedente económico acumulable del campesino se invirtiese en mejoras productivas, porque se lo arrebatava o desviaba al consumo, pero ya en sus manos tampoco lo canalizaba a su fin productivo, sino que lo destinaba a extender su actividad, a consolidar su poder económico y político, al consumo conspicuo o a inversiones conservadoras en los centros urbanos.

Agente estructural en el funcionamiento de las comunidades rurales, el cacique fue también pivote que se enlazaba a otros grupos sociales, los cuales determinaban lo que en ellas ocurría desde fuera del escenario rural. Desarticulada —o con la sola articulación caciquil—, inermes, agotada en sus contradicciones internas, la gran masa campesina no era capaz de hacer valer en la realidad económica y política su fuerza numérica, sobre todo porque no podía representarse a sí misma y en su nombre actuaban, como si la representaran, los múltiples agentes que la estaban explotando y que así se constituyeron también en sus intermediarios políticos. En este lapso, los obreros eran aún una clase emergente, en lucha por conseguir su propia representación y la coyuntura colocaba objetivamente sus intereses en oposición a los de los campesinos, en torno al precio de los artículos de consumo. En contraste, los grupos industriales y comerciales se encontraban en fase insurgente. Pronto, en alianza con los

grupos financieros - a los que después se subordinarían progresivamente - y con las crecientes inversiones extranjeras, llegaron a constituir un grupo claramente dominante. Sus filas fueron constantemente engrosadas por enriquecidos de todas procedencias, que basaban su fortuna inicial en alguna corruptela y aumentaban rápidamente sus capitales, gracias a una política que buscaba elevar tanto como fuera posible la tasa de ganancia de las empresas ya constituidas y abrir constantemente nuevas oportunidades lucrativas de inversión. Base social de estos grupos dominantes fueron los segmentos sociales intermedios, que se ampliaban con rapidez. Estos segmentos padecían en diversas formas las consecuencias de la situación, pero al mismo tiempo compartían sus beneficios para algunos, al recibir una tajada - a veces sólo migajas- del pastel que la neutra economía arrebatava cotidianamente a los campesinos, a través de una mano invisible del mercado que funcionaba como mano encubridora de los intereses subyacentes.

#### La trama

Con semejante escenario y tales actores, la trama de la obra resulta obvia: con el disimulo que permitía la metafísica del mercado, se impuso a los campesinos la tarea de contribuir al financiamiento de la industrialización y a la creación y fortalecimiento de los enclaves de alta productividad agrícola, en la forma establecida por los grupos dominantes. Una vez que terminaran esta tarea, los campesinos desaparecerían como tales, con toda su estructura social, para adoptar otros papeles en la vida económica.

La experiencia cardenista dejó fuera de duda que en nuestro país la nacionalización de la tierra operaba precisamente al revés de lo que requiere el desarrollo capitalista en la agricultura, pues entre nosotros implicó sustraerle una parte de la superficie laborable, porque una porción importante de la tierra nacionalizada no se convirtió en coto de caza de agricultores libres que reivindicaran más tarde propiedad privada sobre explotaciones ya desarrolladas, sino que se transformó en tierras ejidales o nacionales. En consecuencia, en vez de esperar que la propiedad de la tierra se consolidase *a posteriori*, es decir, una vez que se hubiera asentado la organización capitalista de la explotación, fue necesario en nuestro caso salvaguardarla *a priori*, instituyendo la *propiedad privada de la tierra como prerequisite de la actividad del agricultor*. Esta fue la función que cumplieron el uso liberal y el abuso del amparo agrario y de la expedición de certificados de inafectabilidad, así como la integración en una sola de las nociones de inafectabilidad y pequeña propiedad.

No bastaba, sin embargo, superar este escollo para que floreciera la agricultura capitalista, porque los agricultores mismos carecían en su mayor parte de los medios de producción previamente acumulados, cuya aplicación a la tierra fuese el motor de la revolución agrícola esperada. Tuvo entonces el Estado que echarse a cuestras esta nueva tarea. De 1950 a 1970 la expansión de la superficie bajo cultivo se mantuvo a la tasa de 1.5% al año y se realizó fundamentalmente con base en la acción estatal. Igualmente, el 70% de los recursos que el Gobierno federal destinó al fomento agropecuario a partir de 1950 se aplicó a la construcción de obras de gran irrigación, en cuyas tierras los ejidos quedaron

siempre en posición subordinada. Puesto que, de no encontrarse salida adecuada a la desarticulada pero constante presión de los campesinos con derechos a salvo, ésta se ejercería inevitablemente sobre los flamantes enclaves de alta productividad que se creaban de ese modo, se intentó salvaguardarlos encauzando fuera de ellos la presión campesina. Del total de tierras entregadas a ejidatarios, fueron de riego 1.5% de 1947 a 1952, 1.27 de 1953 a 1958, 0.8% de 1959 a 1964 y 0.5% de 1965 a 1968. En esos mismos períodos, los porcentajes correspondientes al reparto de tierras *no laborables* a ejidatarios fueron 78.8%, 74%, 81% y 91.3%. Era evidente que si los agricultores mejor dotados carecían de recursos previamente acumulados para realizar mejoras productivas, menos aún los tendrían los ejidatarios o los campesinos sin tierra al momento de recibir su parcela. Pero debe recordarse que no se buscaba el desarrollo de estos campesinos, sino su transformación en jornaleros de la agricultura comercial o en trabajadores urbanos. Al dotarlos de parcelas, en esta fase de transición no sólo se atenúa su presión sobre las tierras productivas, sino que se crea un estímulo adicional para el desarrollo de la agricultura capitalista: una reducción del costo de la mano de obra, pues los campesinos tradicionales obtenían de sus parcelas, aunque fuese en mínima escala, una parte de los alimentos que necesitaban para sobrevivir. Por ello, podían aceptar salarios inferiores al mínimo de subsistencia al contratarse como jornaleros en los enclaves de alta productividad. Otra forma de atenuar la presión campesina consistió en organizar un reparto simulado, que fuese contrapartida del latifundio simulado. Se estima que hacia 1970 se habían "repartido" 30 millones de hectáreas, cuyas resoluciones presidenciales no se habían ejecutado.

Tampoco esto era suficiente. La casi imposible tarea de crear una agricultura capitalista donde no había condiciones adecuadas para su desarrollo progresivo exigía la tutela constante del Estado, porque si quedaba librada a sus propias fuerzas entraba pronto en agonía. Había que darle crédito suficiente. Aunque las estadísticas al respecto no ofrecen mayor ayuda para identificar el fenómeno, porque no se han registrado en función de los tipos de sujetos de crédito, es posible observarlo indirectamente si se toma en cuenta que el desarrollo de la agricultura capitalista se concentró regionalmente, en unas cuantas zonas y entidades federativas, y se orientó a ciertos cultivos comerciales: trigo, algodón, sorgo, fresa, tomate, oleaginosas y algunos otros. Fue ahí, también, donde se concentró el crédito institucional disponible. Un 25% de los productores no recibieron crédito alguno y el 50% quedó en manos del financiamiento no institucional, que en su mayor parte otorgaron los "empresarios" caciquiles, en condiciones fuertemente onerosas para los campesinos tradicionales.

Dentro del esquema, era natural que se pusiera especial interés en la producción de insumos modernos - fertilizantes, semillas mejoradas - y a la mecanización. El esfuerzo fue sin duda notable. La superficie fertilizada pasó del 4.8% en 1950 a casi el 40% en 1970 respecto a la superficie cosechada. De nuevo, empero, en este caso con el argumento técnico de buscar el máximo aprovechamiento de los fertilizantes disponibles, el insumo se concentró en los enclaves y en unos cuantos cultivos, siendo ahí, como es obvio, el motor principal de la notable elevación de los rendimientos. El

sentido del esquema queda enteramente de manifiesto al tomar en cuenta que en esos cultivos y enclaves los mismos grupos sociales que sustentaban el modelo general fueron capaces de lograr que para ellos - el sector más próspero de la agricultura— los fertilizantes llegaran a precios más bajos que para los campesinos, con base en subsidios del Gobierno federal que sólo a ellos se aplicaban. Una evolución semejante, que sería prolijo describir, se registró en el caso de las semillas mejoradas, otros insumos modernos y la mecanización.

En materia comercial, la intervención reguladora del Estado se inició institucionalmente en 1937, con el doble propósito de estimular a los productores y proteger a los consumidores, pero sólo en 1953 se inició formalmente la fijación de precios de garantía y su aplicación para la compra a los productores. Pero también en este aspecto el esquema general entraba en operación. El nivel de los precios de garantía se fijaba en términos de las necesidades del productor tradicional, para hacerlo equivalente a una especie de salario mínimo para el campesino. Sin embargo, el aparato comercial disponible no podía lograr que el precio establecido prevaleciera en todo el campo mexicano y el grueso de los campesinos tradicionales no podía colocar directamente sus productos en el mercado, por lo que aquéllos recibieron a lo largo del período precios inferiores a los de garantía (que además se habían congelado desde 1963), mientras los agricultores comerciales lograban un nivel abultado de ganancias, pues sus costos de producción por tonelada eran muy inferiores a los que habían servido de base para calcular los precios de garantía.

El papel de la investigación agrícola en este proceso merece consideración especial. Durante los primeros cuatro decenios del siglo actual se emprendieron valiosos esfuerzos de investigación. Sin embargo, sólo hasta 1942 la ciencia moderna comenzó realmente a desempeñar una función importante en el desarrollo de la producción agropecuaria en nuestro país. Es de la mayor trascendencia que a partir de entonces esa función se haya cumplido con una aportación estadounidense significativa. Ciencia y tecnología agropecuarias, durante esos decenios estuvieron fundamentalmente al servicio de las zonas en que se intentaba desarrollar la agricultura moderna. Para tal actividad y para semejante orientación, la cooperación norteamericana era evidentemente útil: el país vecino podía ofrecernos las técnicas apropiadas y "prestarnos" los investigadores pertinentes. Tenía, además, voluntad política de cooperación, pues el desarrollo agropecuario de nuestro país que de ese modo se impulsaba—dentro de esquemas de ventajosas comparativas— resultaba de gran interés para Estados Unidos, pues aumentaba la capacidad de México como proveedor—de ciertos cultivos industriales a bajo precio— y como cliente—de los excedentes de granos norteamericanos.

Sobre estas bases, la investigación en materia agropecuaria se concentró en centros de excelencia que perseguían una aplicación adecuada de los avances de la alta tecnología. Son indudablemente de gran mérito las contribuciones que así hicieron a nuestra propia Revolución Verde, colocando al país en una posición de vanguardia en estos aspectos. Lo que no es aceptable es que semejante esfuerzo se haya realizado al precio de dejar prácticamente en el abandono la investiga-

ción orientada a lograr avances semejantes en nuestra gran base agrícola de temporal. Los resultados de la investigación realizada pueden aplicarse en condiciones ecológicas, técnicas, económicas y sociales que en nuestro país sólo existen en las limitadas áreas de los enclaves de agricultura comercial. De escasa o nula utilidad son para el resto de la agricultura, que tampoco ha tenido el respaldo de una investigación que parta de la identificación precisa de las condiciones en que opera y aproveche su enorme experiencia para multiplicar sus éxitos y eludir sus fracasos.

Quedó así integrado, en conjunto, un juego de tijeras para el fomento de la agricultura comercial. Asentada en las grandes obras de infraestructura creadas por el Estado (que se ocupaba además de entregarle el agua a precios subsidiados y de conservar las obras), o sea, establecida en áreas que ya no exigían grandes inversiones para mejoras productivas, recibía el doble estímulo de un bajo costo de mano de obra (con salarios inferiores al mínimo de subsistencia) y un precio superior al del mercado (el de garantía). Contaba, además, con crédito barato (ya que no abundante), insumos modernos subsidiados, apoyos para la mecanización, asistencia técnica razonablemente eficaz y con los avances de la investigación agrícola, que es preciso considerar espectaculares.

#### *El desentlace*

Los resultados iniciales del modelo dieron lugar al optimismo y fortalecieron la decisión de llevarlo adelante. De 1952 a 1956 el volumen de la producción agrícola aumentó a una tasa de 6.5% anual, cifra en verdad impresionante. El área cosechada, por su parte, creció en ese lapso a 1.9% anual y los rendimientos a 3.8%. En los siguientes diez años estas tasas cayeron aproximadamente a la mitad, pero aun así fue posible que el aumento sostenido de la producción permitiera generar excedentes exportables, primero, y luego alcanzar la meta de la autosuficiencia en la producción de alimentos básicos, que más adelante fue rebasada, presentándose también excedentes de estos productos.

La paz parecía reinar en el campo mexicano. Periódicos estallidos de violencia y algunas "caravanas de hambre" podían considerarse hechos anómalos en una situación general de calma y trabajo productivo. Tal era el ambiente, al menos, que se pretendía prevaleciente en el país, cuando bajo la superficie empezaban a surgir algunos síntomas alarmantes. Tales síntomas— ante todo la tendencia al estancamiento de la producción— se fueron acentuando después de 1965 y hacia 1970 era ya posible averiguar lo que había ocurrido, aunque sus consecuencias más graves sólo se hicieron evidentes unos años más tarde, al estallar la crisis mundial de alimentos y sucederse varios ciclos de un clima adverso en el país. Quedó claro entonces que, si bien el progreso agrícola no había sido enteramente ilusorio y la ruta trazada no era un camino sin regreso, ya no resultaba viable mantener tal rumbo.

La agricultura, es cierto, había contribuido decisivamente a financiar el desarrollo industrial del país, tanto mediante la transferencia neta de recursos cuanto por la aportación sostenida de divisas. Pero había quedado exhausta por el esfuerzo. Aunque a través del sistema de relaciones de

intercambio seguían fluyendo volúmenes considerables de recursos hacia las ciudades, una corriente inversa crecía constantemente para compensar el deterioro general de las condiciones de producción y de vida en el campo. No solo era necesario recuperar el ritmo de inversión pública en el sector agropecuario, cuya proporción en la inversión total del sector público había estado disminuyendo, sino que era urgente, además, multiplicar el gasto en "bienestar" para las comunidades rurales, que se encontraban ya a niveles insostenibles de ocupación e ingreso.

El sector moderno, espina dorsal del desarrollo en la agricultura, dio muestras de carecer de una dinámica interna suficiente y se hizo aún más evidente la medida en que dependió de la extracción de recursos de la agricultura tradicional. Los mecanismos que habían servido para crearlo y estimularlo comenzaban a operar como frenos de la modernización. En vez de orientarse al aprovechamiento óptimo de sus recursos, asumiendo riesgos para el logro de la máxima ganancia y ampliando sus inversiones en el campo, los agricultores modernos tendieron a preferir una explotación subóptima que ofreciera menos riesgos - técnicos o de mercado - y comenzaron a canalizar sus ganancias a diversas formas de consumo conspicuo y a sectores ajenos al agropecuario: a menudo a actividades comerciales especulativas o a inversiones conservadoras - como en bienes raíces - en los centros urbanos, siguiendo el camino ya transitado por el cacique.

La ampliación o fortalecimiento de los enclaves mismos tampoco parecía ya posible. Debido al creciente costo por unidad de las grandes obras de infraestructura, agotadas ya las posibilidades "naturales" obvias, aquéllos sólo podían plantearse al precio de sacrificar sin ventaja otras inversiones públicas indispensables. En muchos casos, de otra parte, los rendimientos habían llegado ya a tales niveles que las inversiones necesarias para conseguir nuevos aumentos exigían volúmenes de recursos financieros y técnicos que las hacían prácticamente incosteables.

El sector entero mostraba un debilitamiento sustancial. Algunos ejemplos pueden servir de testimonio: la producción total, que todavía de 1960 a 1965 creció a la alta tasa de 8.2% (sobre todo por aumentos en la superficie bajo riego - 3.3 millones de ha. de incremento - y por cambios tecnológicos en la agricultura comercial), se incrementó solamente a razón de 1.8% anual de 1965 a 1970. Las tasas respectivas en los distritos de riego fueron de 9.4 y 2.4 por ciento y de 7.7 y 1.4 por ciento en el resto del país. El valor de las exportaciones agropecuarias (punto fundamental del modelo en curso), que aumentó 10.1% anual de 1960 a 1965, creció sólo 0.9% al año en la segunda mitad de esta década.

¿Qué había ocurrido, mientras tanto, con los protagonistas de esta historia?

Para 1960, poco más de 3% de las fincas poseía 43% de la tierra arable y rendía el 54% del producto agrícola total. En contraste, la mitad de las fincas sólo controlaba la octava parte de la tierra y contribuía con alrededor del 4% del producto. El 84.1% de los predios producía sólo 21.3% del valor de la producción. Aunque no se dispone de cifras para 1970, todo permite suponer que la situación empeoró.

En auténticas pequeñas propiedades y en latifundios abiertos o simulados, los empresarios de la tierra habían tenido una época de gran prosperidad. Para muchos de ellos, la actividad agropecuaria había pasado a segundo término por el progreso de los negocios urbanos que crearon las ganancias de sus explotaciones agrícolas. En el período se registraron auges de diversos cultivos, cada uno de los cuales dejó tras de sí una cauda de millonarios. Una parte de estos empresarios creó una agricultura moderna y vigorosa, bien integrada, con amplia capacidad financiera y comercial. Otros muchos propietarios privados, de menor dimensión, se encontraban repartidos por el país, con la permanente incertidumbre derivada de la miseria que los rodeaba y la imposibilidad de emplear los capitales que acumulaban y la técnica que poseían en la tierra que no les pertenecía, pero operaban de cualquier modo con éxito productivo. Por su actividad y sobre todo por la de empresarios caciquiles, el arrendamiento de parcelas se había convertido en una práctica general. Este fenómeno, que responde fundamentalmente a la imposibilidad del campesino de explotar su parcela con sus propios recursos, es abiertamente ilegal y corrompe aún más las estructuras de la vida agrícola. Provoca, además, un grave deterioro de los recursos productivos, porque quien arrienda se ocupa solamente de extraer el máximo provecho de la tierra durante el ciclo arrendado, agotando el suelo y cerrando toda posibilidad de la realización de nuevos productos.

La viabilidad de la compra y venta de tierras en las colonias agropecuarias tuvo un efecto polarizador. Por una parte, ciertos colonos se hicieron de tierra adicional y se convirtieron en agricultores ricos, operando en términos generales como los que se acaban de mencionar. Otro grupo de colonos pasó a formar parte de las explotaciones minifundistas dentro de los esquemas de la agricultura tradicional.

La mano de obra asalariada, que de 1950 a 1960 aumentó aparentemente con rapidez, hasta llegar a 2.2 millones de empleados en este último año, creció sólo a razón de 1.5% anual en el siguiente decenio, pasando a 2.6 millones de empleados en 1970.

El estado general de los campesinos ejidatarios, minifundistas, comuneros y jornaleros temporales o permanentes mostraba hacia 1970 un franco deterioro. La situación en materia de ocupación puede ilustrar claramente el fenómeno. El subempleo afectaba al 45% de la población económicamente activa del país, cifra que equivale a 23% de desocupación total, al que debe agregarse 4% de desempleo abierto registrado en el Censo de 1970. De esos desempleados, el 61% correspondía al sector agrícola, el cual además contribuía decisivamente al desempleo en los demás sectores por su emigración masiva. Del total de la fuerza de trabajo agrícola en 1970, 36.1% sobrevivía apenas de la explotación de su parcela y tenía que ocuparse temporalmente como jornalero o en otras actividades. Otro 57.6%, formado por campesinos sin tierra o por quienes obtenían una proporción mínima de su ingreso de la explotación de su parcela, constituía una masa de población enorme inserta en el sector agrícola, aunque en realidad marginal a él. "Esta masa --se ha sostenido-- constituye una reserva de fuerza de trabajo para la agricultura comercial", sólo que ésta es incapaz de darle empleo. En el 60% de los predios maiceros y el 33% de los frijoleros la pro-

ducción se destinaba exclusivamente al consumo de los campesinos. En el 20% del total de predios no se lograba siquiera producir maíz o frijol suficiente para el consumo de las familias campesinas durante el año, por lo que se veían obligadas a adquirirlos con ingresos de otras fuentes. Y las otras fuentes de ingreso campesino se encontraban también en abierto deterioro hacia 1970: la producción y venta de artesanías y la explotación del bosque, la pequeña ganadería y otras muchas actividades complementarias de la economía campesina se hallaban generalmente en crisis. En cuanto a la ocupación como jornaleros temporales o permanentes, no sólo prevalecía un salario inferior al mínimo rural, sino que en algunos grupos, como los de la zafra azucarera, las condiciones de trabajo resultaban enteramente inhumanas.

Cabe, pues, afirmar que dentro del modelo se consiguió en buena medida colocar en condiciones de extinción a la gran masa campesina de la agricultura tradicional. Pero no se logró la contrapartida esperada. En vez de un moderno desarrollo capitalista, la inserción en nuestra sociedad de una falsa analogía, ciegamente impuesta por los grupos sociales que creían en ella tanto como de ella disfrutaban, generó un dramático círculo vicioso de atraso y destrucción del que aún el país no logra recuperarse.

#### TRANSICIÓN O REESTRUCTURACIÓN: 1976-1987

Falta aún perspectiva para apreciar el sentido histórico de lo ocurrido en los últimos cinco años y tampoco se cuenta con las cifras del que está por terminar para acotar los fenómenos. Sin embargo, es posible intentar en un trazo general la formulación de una hipótesis sobre las principales tendencias de los cambios registrados en la agricultura durante este lapso.

La situación descrita, económicamente estática y socialmente congelada, encerraba el evidente peligro de un estallido violento enteramente anárquico y destructivo. Surgió, en cambio, el fenómeno que acaso constituirá lo más relevante de la evolución agrícola en estos años. En la medida en que desde varios frentes se libró una vigorosa batalla contra las principales trabas que restringían la iniciativa campesina, los hombres del campo la empezaron a retomar y se pusieron en marcha. Por las condiciones en que se encontraban, no cabía esperar que este movimiento fuese un impulso organizado y consciente, con metas claramente definidas y opciones viables de acción. El despertar tenía que ser atropellado, en muchos sentidos caótico y a menudo contradictorio. Pero lo fundamental era que un núcleo importante de campesinos intentaba dejar de ser un actor pasivo de una historia que lo conducía a la extinción: buscaba con un nuevo impulso provocar un cambio de rumbo que les abriese posibilidades de mejoría en sus condiciones de producción y de vida.

Este movimiento campesino, difuso e invertebrado en muchos aspectos, pero preciso en sus reclamos básicos, se dio en el marco de condiciones objetivas que hacían indispensable poner una creciente atención en el campo. La crisis mundial de alimentos se había convertido en una realidad. En 1972 las reservas mundiales habían llegado a sus niveles más bajos en dos decenios y el hambre había hecho su aparición dramática en más de 40 países. La escasez, familiar

en los pueblos del Tercer Mundo y sobre todo en las masas rurales, tocaba ahora a las puertas del mundo desarrollado y se hacía sentir en los grandes centros urbanos. Esta escasez, el peligro mismo de que el hambre pudiese afectar a todos y no sólo a los que había afectado siempre, venía acompañada de un acelerado proceso inflacionario que desarticulaba cada vez más la economía urbana. Si el problema de la producción de alimentos adquiría de esta manera absoluta prioridad en la agenda nacional e internacional de problemas económicos, sociales y políticos, resultaba inevitable revisar con más atención que nunca la situación de los campesinos.

Fue preciso, en tales condiciones, adoptar nuevos enfoques. La orientación de política que había puesto el acento en la teoría de las ventajas comparativas, con la idea de producir artículos de alto precio en los mercados internacionales y adquirir cuando fuese necesario granos baratos, tuvo que batirse rápidamente en retirada. Al invertirse radicalmente la situación de los precios en los mercados internacionales y al surgir el peligro muy concreto de que en un momento dado no fuese posible adquirir a ningún precio los alimentos básicos de la población en vista de la escasez mundial, la autosuficiencia en la producción de alimentos se convirtió en la meta fundamental de la producción agropecuaria. Esta meta implicaba por sí misma poner el acento en la agricultura tradicional, donde se han producido desde siempre los alimentos básicos del pueblo mexicano: el maíz y el frijol. De este modo, al mismo tiempo que los campesinos empezaban a moverse para hacerse oír, para encontrar un eco definido a sus inquietudes fundamentales y una atención concreta para sus necesidades básicas, la sociedad urbana se veía obligada a oírlos con gran interés a fin de obtener de ellos la respuesta productiva que necesitaba.

De la misma manera que el paternalismo o la tutela con los campesinos coarta su desarrollo, cuando esas actitudes se aplican a la agricultura comercial capitalista introducen deformaciones en su estructura que inhiben su capacidad potencial de desarrollo de las fuerzas productivas. Por los factores ya indicados, la política de estímulos masivos a la agricultura comercial ya no podía aplicarse o estaba dejando de operar en el sentido deseado, e incluso llegaba a propiciar la salida de recursos del sector. Aunque parezca paradójico, en las condiciones reales en que se encontraban estos agricultores, la forma de inyectarle de nuevo dinamismo a su actividad y orientarlo a la inversión de sus ganancias en ella no consistía en darles apoyos o estímulos adicionales sino en quitarles los que tenían, o sea, colocarlos en condiciones económicas que los obligaran a elevar su eficiencia de operación buscando la optimización en el aprovechamiento de sus recursos.

No es posible esperar dinamismo y efecto progresivo de una explotación capitalista que no es capaz de cubrir a sus trabajadores el mínimo de subsistencia, hecho que implica que no puede reproducir las condiciones de la fuerza de trabajo en que se sustenta. Era indispensable corregir esa situación creando condiciones que expulsaran de la agricultura comercial a quienes por su ineficiencia no debían permanecer en la actividad y estimulando al resto a incrementar su productividad. A ello tendió una variedad de factores y medidas, entre las que destaca un pago masivo de salarios mínimos en obras públicas, que buscaba entre otras cosas

llevar a niveles reales el costo de la mano de obra en el medio rural y lograr que, en el seno de la agricultura moderna, el jornal no siguiera funcionando como complemento del ingreso del campesino tradicional, sino como una actividad productiva que diera ocupación remunerativa a quien la desempeñaba. En forma simultánea, se procedió a retirar progresivamente los subsidios que el Gobierno federal otorgaba a la agricultura moderna a través de los precios de los insumos, y se elevó rápidamente la producción de estos. El crédito fue empleado con estos agricultores como instrumento para orientar la producción en el sentido de las necesidades nacionales y se intensificaron actividades tendientes a generalizar el uso de mejores tecnologías. De importancia decisiva fue un cambio radical en la política de precios de garantía. Además de darles movilidad, incrementándolos varias veces después de que por un decenio se les había mantenido sin cambios, en septiembre de 1975 se realizó por primera vez su revisión global, en el seno de la Comisión Nacional Coordinadora del Sector Agropecuario, con una nueva orientación de la política al respecto que permitirá ajustar periódicamente los precios de cada cultivo de acuerdo con sus costos de producción y las necesidades nacionales, antes de que se inicie cada ciclo.

En suma, en relación con la agricultura moderna, sea por medidas gubernamentales o como efecto de los fenómenos en curso, se tendió a crear una mecánica de funcionamiento económico en que la agricultura capitalista pueda contribuir al desarrollo de las fuerzas productivas en el campo, cubriendo sus costos reales de producción y buscando el mejor aprovechamiento de los recursos de que dispone, o bien deje de existir. Diversos hechos permiten suponer que esta tendencia que se ha estado tomando apunta a eliminar la posibilidad de mantener artificialmente las formas de explotación capitalista, en virtud de que ese mecanismo, que implica canalizar recursos públicos a los agricultores particulares más desarrollados del país, no sólo ha demostrado ser ineficiente para dar dinamismo a la agricultura moderna, sino que además resulta enteramente irracional en términos del sistema de prioridades de la sociedad en conjunto.

En lo que se refiere a la agricultura tradicional, se produjeron en estos años cambios que pueden ser el antecedente apropiado para una evolución posterior más dinámica. Condición de ello es la modificación de las relaciones sociales prevalecientes en ella y esto significa, ante todo, la supresión del caciquismo. Sin duda es aquí, en este campo de lucha, donde han surgido las mayores dificultades y tensiones. Se ha ganado en unas batallas y se ha perdido en otras; aun esta lejos el fin de la guerra. La presión campesina, movida a menudo por la desesperación, exacerbada por una explotación de decenios o siglos, puede muchas veces ser capaz de crear una organización que expulse al cacique. Pero si esta organización no tiene más meta que esa ni más sustentación que la energía que surge de una rebelión legítima pero inadecuadamente articulada, pronto da síntomas de debilidad y no puede mantenerse una vez logrado su objetivo inmediato. Después de este éxito, pasan a primer plano las contradicciones internas del grupo, al que sólo había unido una lucha efímera contra un enemigo común, personalizado, y ante su frecuente falta de claridad y de recursos para orientar su esfuerzo al nivel que se requiere —al de las estructuras básicas de la producción y el intercambio—, se crean fácilmente las condiciones para que surja un nuevo cacique, con

lo que solo se logra una sustitución física de personas, pero sin cambio alguno en el régimen productivo.

Por esto, un combate eficaz del caciquismo exige esfuerzos de muy diversos géneros y desde varios frentes. Entre los emprendidos en el período, debe mencionarse en primer término el realizado en materia de capacitación, que no sólo tendió a mejorar la capacidad productiva directa de los campesinos, sino que además se orientó a propiciar su organización y su participación creciente en la comercialización e industrialización de sus productos. Esta es, sin duda, una inversión básica en la agricultura tradicional, que en muchos sentidos funciona como prerrequisito de todo cambio de importancia. Es necesario, al respecto, no sólo tomar en cuenta los esfuerzos de capacitación formal e informal de los campesinos en aspectos de tipo técnico o de información general, sino también, y sobre todo, la capacitación real que resulta de su propia lucha social y del contacto que así entablan —bajo nuevas bases— con otros grupos. Esa experiencia concreta, muchas veces dolorosa, no exenta de peligros y en general asimilada con lentitud, es profundamente formativa y sienta las bases humanas de la acción orgánica que necesitan emprender los campesinos para la solución cabal de sus problemas.

En segundo lugar, debe tomarse en cuenta la reorientación de la política de precios de garantía. Este sistema es en sí un mecanismo que entraña un tratamiento uniforme a todos los productores. Como es obvio, empero, un trato igual a desiguales es un trato desigual. Aunque por mucho tiempo el sistema se basó para el cálculo de los precios en las necesidades básicas de los campesinos tradicionales, no pudo conseguir cabalmente sus objetivos porque no lograba establecer una efectiva diferenciación entre los distintos tipos de productores. Los sistemas de precios diferenciales por regiones y tipo de productores que no han resultado adecuados, porque afectan la función reguladora a escala nacional, en cierta forma protegen la ineficiencia sin corregir el fondo de las desigualdades que se derivan de la diferente calidad de los recursos naturales y tienden a corromperse. Para dar un trato desigual a desiguales, o sea para ejercer efectivamente una discriminación positiva en favor de los productores más débiles, es necesario aplicar un sistema de tratamientos diferenciales que no afecte la naturaleza misma del precio de garantía. Esto puede hacerse agregando a los precios mismos apoyos y servicios susceptibles de canalizarse de manera exclusiva a los campesinos tradicionales. Tal es el camino que se adoptó en estos años. Las bodegas rurales CONASUPO, cuya operación se entregó a campesinos capacitados para ello, comenzaron a prestar los servicios adicionales que tradicionalmente proporciona el intermediario, como costalea, desgranado, transporte y otros. Se inició también un programa institucional de crédito al consumo, para satisfacer las necesidades de los campesinos durante su cultivo. Se multiplicaron las tiendas y centros de venta de productos básicos operados por los propios campesinos, así como la venta directa a bajo precio de fertilizantes, semillas mejoradas y aperos de labranza. En suma, se desató un proceso tendiente a modificar las relaciones de intercambio entre el campo y la ciudad, mediante una participación directa de los campesinos en los procesos comerciales, con el apoyo estatal.

Un viraje semejante comenzó a registrarse en las inversio-

nes públicas en materia de riego. En vez de las grandes obras de infraestructura que dieron lugar al surgimiento de la agricultura moderna, el esfuerzo se empezó a concentrar en pequeñas obras de irrigación y mejoras productivas de bajo costo, de tal manera que fuese posible emplear los escasos recursos públicos en un mayor número de áreas, aunque la necesidad urgente de rehabilitar los distritos de riego siguió absorbiendo una parte sustancial de aquéllos.

Está en curso, asimismo, un proceso de cambio en la orientación de los esfuerzos de investigación agrícola que tiende a dar mayor peso a la que se necesita en la agricultura tradicional. Aunque es claro que en este caso los resultados no pueden lograrse de inmediato y no obstante las diversas formas de oposición que este cambio está teniendo que vencer, se han registrado ya avances de la mayor importancia en este sentido.

La transformación de las estructuras productivas en el campo es necesariamente un proceso dilatado y complejo. Aunque desde 1970 se inició un proceso de cambios del que sólo se han dado aquí algunos ejemplos relevantes, la inercia de los decenios anteriores prevaleció y seguirá prevaleciendo por algún tiempo, sobre todo en la medida en que esos cambios suscitaron una oposición decidida aunque no siempre vertebrada y organizada por parte de los intereses tradicionales afectados por ellos. Si bien no llegó a presentarse una caída absoluta en el nivel de la producción agrícola, como era de temerse en vista de las tendencias observadas desde 1965, no fue posible lograr una rápida expansión de la producción, aunque a las dificultades y lentitud inherentes a los cambios emprendidos y a los bloques que ante los mismos opusieron aquellos intereses, vino a agregarse una serie de dificultades de fenómenos climáticos adversos. Coincidió con ello, además, una significativa ampliación de la demanda de alimentos, debido a la mejoría en el ingreso de masas campesinas y urbanas, cuyo bajo nivel actual de consumo de alimentos provoca que gasten en ellos la mayor parte de los incrementos de ingreso que consiguen.

Como consecuencia, después de 1971 comenzaron a presentarse crecientes faltantes de alimentos que fue preciso cubrir mediante importaciones en mercados mundiales enarrecidos y a niveles de precios sin precedente. Fue necesario adquirir en el exterior, durante este lapso, más de 7 millones de toneladas de granos. Sólo para abastecer la demanda de 1975 fue preciso importar, durante la segunda mitad de 1974 y la primera del año en curso, alimentos con un valor superior a los 10 000 millones de pesos. Aunque de esta manera fue posible asegurar el abasto de la incrementada demanda de los productos básicos y se logró, asimismo, corregir en buena medida los movimientos especulativos que sobre todo en 1974 y en relación con el frijol estaban causando grave daño a la economía popular, el hecho ha tenido severas repercusiones en nuestra balanza de pagos, ha absorbido recursos fiscales que se necesitan con urgencia en otros renglones de inversión productiva y gasto social y demostró una incapacidad peligrosa de abastecernos a nosotros mismos en los artículos básicos, que tiene un significado ominoso para el país en términos de dependencia.

En todo caso, en virtud de los avances conseguidos, la producción de 1975 permitió lograr importantes excedentes de frijol, arroz y cártamo, autosuficiencia en trigo, otras semillas oleaginosas y diversos renglones básicos y se redujo

considerablemente el déficit de maíz. Para el abastecimiento de la demanda de 1976, si como es de esperarse persiste o se intensifica el actual ritmo productivo, sólo será necesario importar maíz por un monto que se calcula de 500 000 a un millón de toneladas, cifra que representa del 5 al 10 por ciento del consumo nacional.

En la descripción de este panorama general, es preciso dar cabida relevante a un aspecto básico de lo acontecido en el período: la cuestión de la tenencia de la tierra. No han faltado voces que señalen acusadoramente en particular como exigencia a las autoridades que se han perdido garantías para la propiedad privada en el campo. Debe tenerse presente al respecto, que las garantías que habían prevalecido se basaban en muchos casos en la corruptela y la violación sistemática de la ley, como un mecanismo de conservación de estructuras de explotación de hombres y recursos que era indispensable suprimir. Al revisar la situación de la tenencia de la tierra, se encontraron más casos de invasión de ejidos o comunidades por parte de latifundistas que los de lo contrario. Corregir esa situación implicaba evidentemente afectar intereses bien establecidos, entre los que se encuentran, como es claro, algunos de quienes de manera más exaltada exigen de nuevo garantías reclamo que en ningún caso pueden permitir los campesinos que se escuchado. En segundo lugar, debe recordarse que al iniciarse el presente decenio una superficie que aparentemente alcanzó la cifra extraordinaria de 30 millones de hectáreas se encontraba en una situación irregular de tenencia. Poner orden en esa situación fue una tarea para la que el país no estaba debidamente preparado, por ello tuvo que ser fuente de innumerables fricciones y dificultades, así como de inquietud generalizada. Aunque impostergable esta tarea conllevaba serios riesgos sociales y conducía a menudo a conflictos sin salida desde el punto de vista legal o humano. El proceso, además, tuvo lugar cuando las masas campesinas estaban ya en movimiento. Como se ha dicho ya, tal movimiento no podía tener la articulación necesaria ni la orientación más adecuada. Puestos en marcha sin una conciencia clara del rumbo que debían tomar sus pasos, muchos grupos campesinos fueron presa fácil de la manipulación y así realizaron actos que a menudo resultaron contrarios a sus intereses.

En todo caso, mientras las acciones ilegales de grupos campesinos aparecieron como hechos aislados, se observó un movimiento general hacia la organización, que se presenta como la vía natural y de hecho la única para la solución de los problemas de la agricultura tradicional. Ese movimiento ha correspondido a esfuerzos sistemáticos de organización, de múltiples procedencias y con las más diversas características. Aunque no es aún oportuno realizar una evaluación a fondo de este conjunto de experiencias, algunas de ellas merecen consideración especial.

Por muchos años la administración estatal de explotaciones agropecuarias había mostrado las más graves deficiencias. Sin embargo, las experiencias acumuladas han permitido realizar ahora con éxito algunos proyectos asociados a la operación directa del Estado. En ciertos casos se logró organizar rápidamente a los productores en explotaciones modernas y eficientes y en otros más la acción estatal se realizó como un proceso de transición durante el cual los campesinos reciben la capaci-

tación técnica y administrativa necesaria para manejar por sí mismos las explotaciones. Se trata de una modalidad que parece particularmente aplicable a los casos en que se reparte un latifundio o una propiedad afectable, que se encuentran en condiciones desarrolladas de explotación capitalista, entre campesinos que carecen, en el momento del reparto, de la organización y los conocimientos que harían falta para mantener en funcionamiento adecuado la unidad productiva. En estas condiciones, es tan inaceptable detener el proceso agrario del reparto por esta incapacidad temporal de los campesinos como permitir que la unidad productiva se deteriore y deje de funcionar, lo cual ocurre fácilmente sin una enérgica intervención directa de instituciones gubernamentales. Puesto que, aun con el más intenso esfuerzo de capacitación, no es dable esperar que los campesinos adquieran en el brevísimo plazo que se necesitaría la capacidad de gestión adecuada, el Gobierno puede aportarla temporalmente en la medida en que las circunstancias lo exijan. Han tenido también buenos resultados algunas experiencias en que los organismos gubernamentales han apoyado con recursos a campesinos que por sí mismos habían logrado un alto grado de desarrollo de su organización y capacidad de gestión. Sin embargo, ambas modalidades tienen la obvia restricción de las limitaciones de recursos financieros y humanos del Estado para emprender acciones de esta índole a la escala masiva que la situación exige.

Aparte de éstas, las experiencias más venturosas han sido las que identifican y consideran cuidadosamente el estado de organización en que se encuentran los campesinos, así como sus tradiciones y formas propias de vida, y al mismo tiempo toman en cuenta que el proceso de organización sólo puede realizarse en un período muy amplio. La experiencia histórica demuestra que el trabajo en común cristaliza a través de un largo proceso. Las implantaciones bruscas son efímeras, a menos que la presión externa en que se basan se mantenga por un largo tiempo, lo cual no siempre es posible. Para llevar a cabo la tarea de organización, sin adoptar vías impositivas, más o menos autoritarias, contra las que se ha pronunciado ya nuestra sociedad, se necesita ante todo un intenso trabajo de preparación de promotores, que puedan ocuparse de difundir las prácticas colectivas, dar a conocer las experiencias exitosas y asesorar a los campesinos en su aplicación, sobre todo durante las primeras fases. Además, se requiere orientar en la práctica los esfuerzos hacia formas de transición más asequibles, como el grupo de ayuda mutua, la cooperativa de consumo o el grupo solidario de crédito, que son organizaciones que preparan natural y sólidamente a los campesinos para las modalidades del trabajo en común.

Sin embargo, los nuevos grupos que pueden crearse en las comunidades rurales se enfrentan directa e inmediatamente a los intereses de quienes hasta ahora los han explotado. La estructura caciquil del poder, factor decisivo para la persistencia de la explotación individual de las parcelas o para formas predatorias e ilegales de explotación colectiva (como la renta de parcelas), es el principal obstáculo a las tareas de organización. En la misma medida en que la organización necesita ser general, o sea, realizarse simultáneamente en miles de comunidades rurales, el país podrá quizá disponer de capacidad de promoción de gran número de nuevos grupos, pero ésta no podrá ser muy intensa ni podrá mantenerse en el tiempo como factor exógeno de presión.

En la práctica, los grupos que se formen serán relativamente débiles, sobre todo al principio: librados a sus propias fuerzas, no podrán enfrentarse al cacique para organizar el trabajo en la forma que los libera de su explotación. Por tanto, sólo una presión orgánica del campesino, expresada en una voluntad política federal como la que se ha estado manifestando y unida a una actitud consciente de los habitantes de las ciudades, puede ser la verdadera clave de los cambios que se necesitan y que parecen los más viables en la etapa actual: *modificar las formas de organización del trabajo sin desquiciar el aparato productivo; liquidar viejas prácticas de explotación sin interrumpir el ritmo de la producción e incluso acelerándolo; respetar la persona del cacique, pero no su función; sustituir la forma caciquil del poder, sin padecer el tránsito de la anarquía, por una forma cualitativamente superior de la organización productiva.*

En suma, tras el fracaso de un modelo de desarrollo en la agricultura que ciertos grupos sociales impusieron al país, encubriendo mediante una falsa analogía lo que sólo parece haber sido una defensa de sus intereses específicos, en estos años comenzó a surgir un nuevo esquema productivo que guarda mayor correspondencia con nuestra estructura social posrevolucionaria y se ajusta a los cambios que han estado ocurriendo en la correlación de las fuerzas sociales. De nuevo, la producción agrícola empieza a mostrar dinamismo y está próxima a lograrse la meta de autosuficiencia en la producción nacional de alimentos, aunque hay todavía renglones importantes para cuyo desarrollo se requiere intensificar los esfuerzos de estímulo. De otro lado, los grupos sociales que integran el sector han adoptado pautas más nítidas en la vida social que les abren nuevas perspectivas y posibilidades de desarrollo. En la agricultura moderna, que sólo ha de seguir siendo protegida en la legalidad y no para la corruptela o la violación de la ley dentro de un tutelaje distorsionante, ha surgido una mecánica de funcionamiento que puede permitir que contribuya todavía al desarrollo de las fuerzas productivas dentro del sector, dando ocupación permanente a quienes por ello pasarán a engrosar las filas de los obreros agrícolas y cubriendo en todo caso, a estos trabajadores o a los campesinos que ocupe temporalmente, el costo real de la mano de obra. En cuanto a los campesinos mismos, su creciente participación en los procesos económicos, sociales y políticos abre la posibilidad de que se doten a sí mismos, con el apoyo pleno del Estado, de una nueva organización productiva capaz de transformar la agricultura tradicional en una avanzada del cambio económico y social en el país.

Es posible que al enunciar esta perspectiva se esté rebasando el nivel del pronóstico de base científica para dar lugar al optimismo. Sin embargo, cabe plantear que las hipótesis aquí esbozadas sobre lo ocurrido en estos años son evidentemente discutibles y podrían no resultar válidas como explicación del pasado, pero aun así se pretende sostenerlas y defenderlas como empresa y designio hacia el futuro, de tal manera que, hayan o no tenido validez en cuanto a los años ya transcurridos, la adquieran como producto de un proyecto humano concreto. Al proponer que sea emprendido con ánimo optimista, se pretende solamente recoger el apoteagma de un viejo luchador social, quien recomendó a cuantos se preocupaban por el cambio social tomar en cuenta que en este aspecto todo pesimismo es reaccionario.

## DIGRESIÓN SOBRE EL EJIDO

En torno a esta problemática, parece sorprendente — cuando no reaccionario — que al analizar la viabilidad del ejido se repita o menudee el argumento de que no la tiene por estar insertado en una sociedad capitalista. En la búsqueda de perspectivas de desarrollo para la agricultura mexicana, hay quienes postulan la desaparición formal y real del ejido, como la de la comunidad indígena, para llevar adelante el desarrollo capitalista en el campo hasta sus últimas consecuencias. Unos sostienen tal argumento como una forma de defensa de la propiedad privada, pretendiendo a ritranza que sólo por la vía estrictamente capitalista podría lograrse el desarrollo de la agricultura. Otros más, en declarada oposición a esta tesis, pero concibiendo con ella en la circunstancia, proponen que se promueva la generalización de la organización capitalista de la producción a fin de lograr así la proletarianización cabal de los campesinos — su transformación en obreros, agrícolas o no —, hasta que por ese camino se desarrollen plenamente las contradicciones del capitalismo y pueda abrirse paso un nuevo régimen de producción. Unos y otros, por tanto, aunque desde posiciones ideológicas antagónicas en apariencia, sugieren llevar adelante la forma capitalista de explotación de la tierra, procediendo a la liquidación del ejido o preparando su lenta extinción.

Algunos apoyan esta tesis en la consideración de que el ejido es una supervivencia anómala de formas precapitalistas de producción que deben superarse. Se afirma, por ejemplo, que las comunidades rurales operan bajo el régimen de producción mercantil simple, forma típicamente precapitalista, aunque se hallen plenamente articuladas a la organización capitalista a través de diversos mecanismos. Otros, en cambio, ven en el ejido la presencia aun embrionaria o potencial de una organización productiva más avanzada, realmente promisoría como posibilidad de desarrollo de la agricultura, pero no ocultan su pesimismo en cuanto a su viabilidad mientras no se logre la transformación de la sociedad entera, o sea, mientras no sea abandonado el capitalismo como régimen productivo. Incluso quienes llegan a defender la forma ejidal dan indirectamente la razón a quienes lo combaten o ponen en entredicho cuando describen las dificultades a que se enfrenta, pues casi todas las que mencionan se asocian a las presiones que inevitablemente ejerce la sociedad capitalista sobre una estructura de relaciones sociales que percibe como cuerpo extraño, cuando no enemigo.

El argumento resulta sorprendente y en algunas de sus versiones contradictorio, porque se apoya en parte en el supuesto de que es imposible la coexistencia de dos modos de producción en una sociedad concreta. La historia social real no es sino la sucesión dialéctica de coexistencias de modos de producción, los cuales no son a final de cuentas sino modelos teóricos que no describen sociedades concretas sino mecánica de operación predominante en algunas de ellas. A lo largo de la historia, las sociedades reales tienen una estructura de relaciones sociales que define la forma de organización que predomina en ellas, pero al mismo tiempo admiten hasta por siglos la supervivencia en su seno de formas antiquísimas de producción y de ese mismo seno brotan progresivamente, ampliándose poco a poco las formas de relación social que han de integrar una nueva manera de

organización del trabajo. Las sociedades no pasan de un modo de producción a otro o de una estructura social a otra de la noche a la mañana: su transformación es siempre prolongada y compleja. Si bien es cierto que una nueva organización de la producción no puede desarrollarse hasta que la anterior haya agotado sus posibilidades, esto no se asocia a un nivel específico de tecnología o bienestar — que funcione como parámetro límite de una organización social específica — ni supone que la primera forma tuvo que abarcar plena y absolutamente toda la sociedad para que pueda surgir la nueva forma. Lo contrario es lo cierto. Hay historia precisamente porque una sociedad se entaza profundamente con la que la sigue. Las rupturas repentinas sólo se dan en la cabeza de los profesores académicos que las conciben. En la realidad se da el *continuum*. No es preciso siquiera que la nueva forma brote naturalmente de la antigua, pues puede llegar a ésta del exterior, primero con la umidez propia del recién llegado y luego desarrollándose más o menos rápidamente según las necesidades objetivas y las condiciones particulares en que esto ocurre.

Es cierto que, del mismo modo que una estructura social determinada puede verse frenada en su desarrollo por las supervivencias de formas anteriores (que sobre todo en las superestructuras funcionan a veces como arañazos persistentes, casi inabables), así las estructuras sociales predominantes frenan de alguna manera, consciente o inconscientemente, directa o indirectamente, las formas de relación social que socavarán y liquidarán ese dominio en la construcción de una nueva estructura social. Pero nada de esto permite pensar que una nueva forma de organización productiva carece de viabilidad porque es distinta a la predominante o incluso su negación. Parece evidente que el ejido es una forma no capitalista, independientemente del grado en que este sometido a la economía capitalista prevaleciente. Aunque su calidad como negación del capitalismo es distinta a la calidad del obrero como negación del patrón — o a la de este como negación de aquél — es una negación real que opera como auténtico freno de la expansión capitalista. Su increíble supervivencia, que ha resistido tantos decenios de sistemáticos embates — de los que sale a menudo fortalecido —, puede atribuirse a la medida en que parece combinar con fortuna el pasado con el futuro. Sus raíces son antiguas: pueden localizarse en sistemas productivos anteriores a la conquista. Pero igualmente profundas son sus proyecciones al futuro, y no parece admisible el análisis que lo considera aún como una forma precapitalista (contorne al modelo mercantil simple, por ejemplo), a pesar de que ciertas expresiones aparentes del funcionamiento económico de las comunidades rurales pueden servir de sustento a este argumento.

Si bien es cierto que la forma inicial del ejido fue titubeante e imprecisa, ello es atribuible al hecho de que con él se planteaba el primer intento en el mundo de establecer en serio, como una práctica social general, una opción al estilo individualista del Estado burgués tradicional. No se podía o no se quería, ni objetiva ni subjetivamente, asumirlo como modalidad socialista: no tenía ese carácter la Revolución que lo dio a luz. Pero se dejaba atrás las formas, que hoy resultan cada vez más obsoletas, de un individualismo trasnochado que hace descansar toda esperanza de progreso en la iniciativa individual. Forma más democrática y potencialmente más productiva y eficiente que la empresa capitalista, como lo demuestran ya diversas experiencias empíricas,

síntesis peculiar de nuestro pasado y nuestro futuro, el ejido conserva aún en embrión su enorme potencialidad de desarrollo. Se ha carecido, desde luego, de la lucidez que hacía falta ante la novedad del fenómeno. Por dogma ideológico ha sido combatido, sin conocerlo realmente, y por otro dogma ideológico se ha exigido de él lo que no puede dar —sin reconocerlo. Nadie debe sorprenderse de que los campesinos resistan una colectivización de la producción ejidal que establece que todos reciban lo mismo, independientemente del trabajo que aporten. Ese principio parece enteramente fuera de lugar, de momento, de contexto histórico, e incluso no guarda parecido con el principio aplicable en una organización comunista avanzada a la que se podría pretender asimilarlo. El ejido (y sus modalidades recientes) es simplemente una posibilidad pragmática de trabajo en común, que se instituye como una vía *natural* de desarrollo para los campesinos mexicanos y que por ello puede ser la más viable en el futuro inmediato. Tan ajeno a nuestra realidad es plantear la cabal explotación capitalista del ejido, puesto que no tenemos recursos técnicos, medios de producción y todos los demás elementos que ello exigiría, como lo son los modelos colectivos importados que muchas veces se pretende implantar, en breve plazo y desde afuera, en nuestras comunidades rurales. Si ha de tener viabilidad, el ejido ha de desarrollarse como una transformación paulatina, tan poco uniforme en su organización interna como heterogéneos son los estados de avance económico, social y político en que se encuentran los ejidatarios, y tan lenta o acelerada como los propios campesinos decidan.

Se afirma a menudo, al tratar estos temas, que la eficiencia de la pequeña propiedad es mayor que la del ejido y que no son ejidos los que surten los mercados sino pequeñas propiedades. La polémica es antigua y no ha sido posible contar con estadísticas que aporten pruebas fehacientes en un sentido u otro. Las disponibles, empero, permiten llegar a la conclusión de que la diferente eficiencia no radica en el régimen de propiedad sino en la forma de explotación de la parcela. Tanto hay pequeños propietarios muy ineficientes como ejidos con altos niveles de productividad, y a la inversa. En conjunto, en términos del valor de la producción y de rendimientos, ambos regímenes de tenencia muestran resultados semejantes: con casi el 60% de la superficie, la propiedad privada aporta al valor de la producción un porcentaje apenas mayor: 64.5%. En cambio, las diferencias son radicales entre la explotación individual y la explotación en común, independientemente de que la primera sea parcela ejidal o minifundio privado y la segunda, ejido colectivo o empresa capitalista. En vez de dejarse atrapar por esa polémica históricamente superada, conviene concentrar la argumentación en los problemas inherentes al tránsito de la explotación individual a la explotación en común, el cual, por lo que se ha dicho, no podrá realizarse en general a la manera capitalista.

Es tiempo ya, por tanto, de que nos enteremos todos, hasta los espíritus más recalcitrantes, que el ejido está ahí para quedarse. Podemos, como los bárbaros de lejanas épocas, destruir sistemáticamente sus avances; podemos obstruir su desarrollo e incluso convertirlo en una rémora, en una pesada carga parasitaria del desarrollo nacional. Pero no podemos deshacernos de él porque es un ser vivo, en constante renovación, con una capacidad notable de supervi-

vencia hasta en las condiciones más adversas —de la que mucho podemos aprender. Es un ser vivo enraizado en nuestra historia, parte de nuestro ser, cuya muerte sería posible sólo con simultaneidad a la nuestra. Es todavía más: en la agricultura es otra vía necesaria que un destino dolorosamente fabricado coloca ante nosotros. La otra, la capitalista, está ya negada en la teoría y en la práctica como fórmula general de desarrollo de la agricultura; si se mantiene dogmáticamente la pretensión de que es nuestra única salida para la explotación eficiente de la tierra y para la solución de nuestros problemas básicos de producción y empleo en el campo, sólo constituirá una atadura más en nuestra dependencia del exterior.

Un grupo reciente de experiencias ha de tomarse también en cuenta dentro de esta línea de pensamiento. Desde el enfoque que sugiere la nueva Ley de Reforma Agraria sobre organizaciones más amplias que el ejido, o a partir del funcionamiento económico del ejido *en el seno* de la comunidad rural, se está planteando la posibilidad de que el ejido funcione como núcleo polifacético de una organización productiva de nuevo cuño.

Aprovechando con un sentido dinámico las diversas fuerzas centrífugas y centrípetas que están en juego, las nuevas formas reconocen ante todo que el móvil de la producción en el medio campesino es por lo general diferente en su esencia al móvil predominante en la economía de mercado: no se produce para obtener una ganancia, a través del intercambio de productos, como ocurre en la empresa capitalista, en la que el intercambio —la venta de mercancías— es el destino necesario de la producción y una condición indispensable del funcionamiento económico de la unidad productiva, sino que se produce para satisfacer las necesidades inmediatas, y el intercambio, cuando se realiza, es sólo un mecanismo más para atenderlas. El reconocimiento explícito de este hecho está a menudo ausente de los planes de desarrollo agrícola, donde se atribuye a la “irracionalidad” del campesino, a su “resistencia al cambio”, la oposición consciente que manifiesta a dedicarse a cultivos que se le plantean como oportunidades más remunerativas y eficientes que sus cultivos tradicionales, pero que tienen como condición el paso a través del mercado para la atención de sus necesidades inmediatas. El mercado no representa para el campesino una posibilidad de ganancia sino una oportunidad de que se le explote: es natural por ende y racional en sus términos, que se resista a ponerse enteramente en sus manos. Incluso cuando su cultivo tradicional es de tipo comercial, es frecuente que el campesino dedique parte de su esfuerzo a protegerse de la incertidumbre del mercado mediante el cultivo —en una parte de sus tierras— de los productos que necesita para sobrevivir. Otros muchos mecanismos habituales en el campo —como el almacenamiento de reservas— cumplen esta misma función.

Este enfoque de la cuestión lleva a plantear en las nuevas formas de organización campesina que rebasan la dimensión del ejido una meta de autosuficiencia local o regional en los productos básicos, que parece indispensable tomar en cuenta al considerar un más sólido y rápido desarrollo de la agricultura tradicional, con una participación dinámica de los propios campesinos y cuando su cambio no se hace depender de la presión exógena persistente.

Las nuevas experiencias reconocen también diferencias cualitativas en el funcionamiento económico de la comunidad rural, en particular respecto a los mecanismos de acumulación, diferencias que llevan a replantear enteramente la conceptualización y diseño de los modelos de desarrollo aplicados en otras condiciones. La optimización de recursos, por una parte, y las formas de generación y uso del excedente económico, por otra, tendientes a elevar la productividad del trabajo y así atender las necesidades crecientes, o sea, las bases mismas, sociales y técnicas, de un desarrollo dinámico, responden a parámetros diferentes.

De un lado, la insistencia en la productividad por persona ocupada, que es la clave del desarrollo de la empresa capitalista, puede quedar subordinado en la unidad campesina, en sus fases iniciales de desarrollo, a los criterios de productividad o rendimiento de los recursos disponibles.

En la unidad campesina el acento respecto a la generación y uso del excedente económico acumulable se vincula fundamentalmente a la posibilidad de retenerlo, contrarrestando las tendencias a la descapitalización que se presentan como resultado del sistema de intercambio prevaleciente. Este aspecto exige replantear las formas de canalización de recursos a la unidad campesina, que muy frecuentemente no pueden traducirse en mejoras de la capacidad productiva o del ingreso campesino porque tienen como paradero real otros sectores de la actividad económica. Exige también, sobre todo, que el esfuerzo de organización de los campesinos tenga que partir de su necesidad de lucha con otros agentes económicos y desarrollarse bajo ese contexto, lo cual implica que los aspectos relacionados con la organización productiva *interna* de los campesinos no deben separarse en ningún momento de los vinculados a la relación con el exterior de la unidad productiva campesina. Su lucha económica es así, directa e inmediatamente, una lucha política.

De la mayor importancia en esas experiencias es el reconocimiento de la integración en la unidad campesina de todos los usos de la fuerza de trabajo. En la mayor parte de las comunidades rurales la actividad propiamente agrícola y la que se desarrolla en múltiples campos para obtener un ingreso adicional forma parte de un solo esquema económico de funcionamiento. Es posible distinguir la existencia de "jornaleros profesionales", que se encuentran ya cabalmente separados de la tierra, de los demás campesinos y aun de sus comunidades rurales de origen. Aunque incluso en ellos se observa cierta tendencia a la recampesinización, operan cada vez más como obreros y se contratan bajo condiciones que les permiten sobrevivir y a veces realizar cierta acumulación. No es éste, sin embargo, el caso general, pues la actividad de los campesinos al contratarse temporalmente como jornaleros sigue siendo por lo común una parte integral del funcionamiento de la unidad productiva campesina.

Por la vía de estas reflexiones es posible prevenir y hacer frente a una de las más importantes dificultades que pueden avizorarse para la organización campesina. Se ha planteado ya en la práctica y comienza a tener formulación teórica el problema de la contradicción que surge entre ejidatarios y jornaleros. Modalidades como las que se dan en los campos cañeros y tabacaleros, donde son los ejidatarios los que

contratan masivamente a los jornaleros, expresan contradicciones reales de los intereses de unos y otros que amenazan peligrosamente las perspectivas de la organización.

Debe ser motivo de análisis profundo, que rebasa el marco de este trabajo, la conveniencia de aplicar la perspectiva sindical (que se presenta como la mejor forma de organización de los jornaleros que trabajan en explotaciones capitalistas) a las condiciones de funcionamiento de las comunidades rurales tradicionales. Idealmente, la unidad productiva campesina, adopte la forma del ejido u otra más amplia, no ha de orientar su desarrollo a la posibilidad de contratar mano de obra, sino a un desarrollo integrado y armónico dentro de una organización única que brinde a todos sus miembros posibilidades de subsistencia y desarrollo. Si esto se logra, no es la perspectiva sindical la que aparece como posibilidad más importante ante la agricultura tradicional, sino una organización integral y autosuficiente de las comunidades rurales. En ella, dentro de organizaciones abiertas y amplias —uniones de ejidos, comités regionales de gestión, etc.— funcionarían pequeños grupos que trabajen en profundidad en las nuevas formas de organización productiva. Aquéllas serían sobre todo mecanismos de defensa de los intereses globales de los campesinos que operarían como manto de protección para éstos. Los pequeños grupos, interactuando con las organizaciones abiertas, constituirían ilustraciones empíricas de las ventajas del trabajo en común, que por su origen y ubicación tendrían un medio natural de irradiación que propiciaría su más rápida generalización.

Apoyándose mutuamente, estos dos tipos de organización podrían contribuir a vertebrar el desarticulado movimiento campesino que ahora prevalece, con lo que se sentarían las bases del desarrollo económico, social y político de la economía campesina en términos no capitalistas, aun cuando se mantenga su subordinación a la economía de mercado. Tal subordinación a otras estructuras sociales parece inevitable *en cualquier régimen de producción* (por lo menos en los que hasta ahora conoce la historia) por la incapacidad de la economía campesina, dada su naturaleza, de plantearse la atención de las necesidades globales de la sociedad. Pero este carácter subordinado de la economía campesina (cualitativamente diferente al de la producción mercantil simple cuando se subordina a la producción capitalista), no le resta posibilidades de desarrollo, si se logra evitar que la relación subordinada seque las fuentes mismas del que éste puede surgir, como ha estado ocurriendo en nuestro país.

Impedir tal fenómeno suicida en que una transferencia de recursos capaz de alimentar el proceso de industrialización adopta formas que la convierten en un sistema predatorio de explotación que socava hasta la médula las bases mismas de la estructura económica y social en que esto ocurre, evitar esta evolución propia del coloniaje que caracteriza nuestro pasado reciente, no es tarea que pueda quedar en manos de la ciega mecánica del mercado o confiarse a la buena voluntad o la lucidez de los agentes que se aprovechan de ella, mientras les es posible y sin medir las consecuencias que hacerlo tiene para toda la sociedad o para ellos mismos en su futuro económico y social. Es una tarea que sólo pueden emprender los campesinos con base en su organización —bajo nuevas formas— y en la capacidad de lucha de que han estado dando muestras.